

# CONFLICTO URBANO EN MEDELLIN DURANTE EL PERIODO 1993-2003

Resultado de investigación

Por: Rommel Cabrera Sosa \*

## Resumen

La ciudad de Medellín –Colombia- ha sido largamente caracterizada, cuando no estigmatizada, por los fenómenos de conflicto urbano que se vivieron de manera exacerbada en las dos últimas décadas del siglo XX, producto a su vez de diferentes formas de violencia que azotaban al resto del país, con intensidades y particularidades que le dieron una resonancia casi única a esta importante ciudad colombiana. Tales particularidades se relacionan con el papel que desempeñó la ciudad en el surgimiento, desarrollo y exaltación de episodios de violencia asociados a la actividad del narcotráfico, la degeneración del conflicto armado derivado de casi cinco décadas de acciones insurgentes que terminó por “urbanizarse”, y la confluencia de factores de decadencia social y pobreza que provocaron procesos de marginación, exclusión y fragmentación de la ciudad.

Las principales características, dimensiones y manifestaciones del conflicto vivido en Medellín durante el periodo en referencia, así como varias de las acciones públicas que sirvieron como elementos de contención o regulación al mismo serán analizadas en la ponencia presentada al XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología, en el marco de referentes conceptuales e históricos que permitan su mejor comprensión y abonen algunos insumos para el eventual direccionamiento de políticas gubernamentales o de ejercicios académicos enfocados al análisis de fenómenos comparables en otras latitudes.

La estructura de la ponencia da cuenta de dos ejes que se articulan y ofrecen una perspectiva integral del tema, a saber: un primer componente que sirve como referente conceptual para la comprensión del tema del conflicto y un segundo componente que hace una revisión del proceso de radicalización de los conflictos urbanos que vivió la ciudad en el último decenio del siglo XX y que de manera casi contundente editaron el estigma social que le granjeó a la ciudad la imagen de violencia que tan duramente lucha por superar.

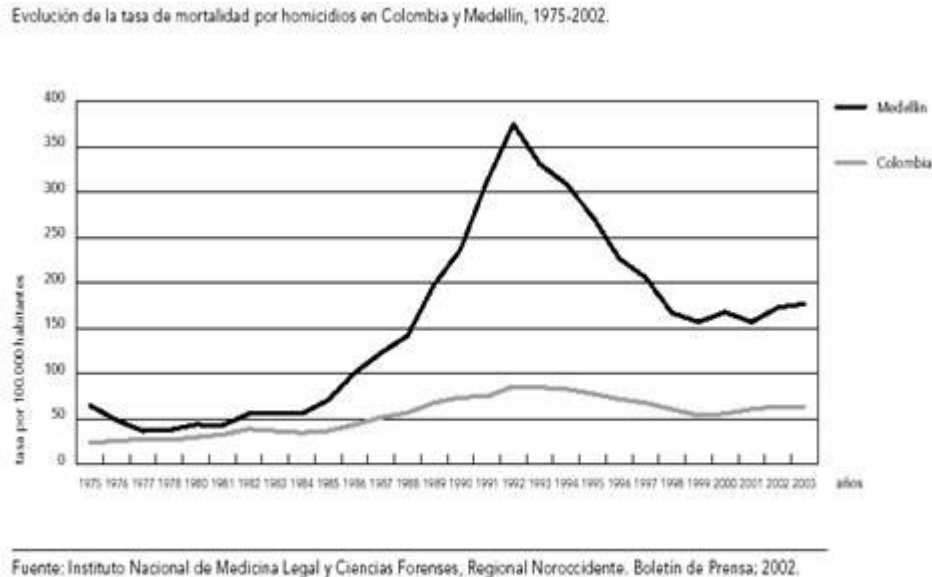
**Palabras clave:** Conflicto urbano, Medellín, violencia urbana

En la década de los años noventa la ciudad de Medellín considerada la segunda ciudad en importancia de Colombia después de su capital, edita la desalentadora historia de violencia y exacerbación del conflicto urbano que se reflejan en el gran incremento de las cifras de homicidios y que en el año 1991-1992 marca un triste record y la ubica en el nada celebre primer lugar como la ciudad más violenta del mundo.

---

\* Profesor de la Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia.

Gráfico 1. Evolución de la tasa de homicidios, comparativo con el país.



Tal como se aprecia en el gráfico, dicho periodo señalaba ya una situación crítica de violencia generalizada en el país que se prolongaba desde los años ochenta por cuenta de la guerra declarada por el narcotráfico contra el Estado y la propia “guerra de los carteles” que sumió a la sociedad colombiana en la profunda situación de crisis que iba a remover todas sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de la cual todavía no ha podido recuperarse.

*“A principios de los 90 se inició una disputa por territorios en los barrios populares, entre grupos armados al servicio de la delincuencia y grupos milicianos independientes. Esta situación, unida a la masificación del narcotráfico, llevó a que en 1991 y 1992 se registrara la mayor tasa de homicidios en la ciudad: 444 por cada 100.000 habitantes, según estadísticas de la desaparecida Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín. (El Colombiano: 20 años de llanto en las calles).*

Durante los años sucesivos (1993-1997) se vislumbró un cierto repliegue en las cifras de homicidios reflejando el descenso en los índices de violencia y una menor intensidad del conflicto, época que en la que coincidieron diversos hechos como la desarticulación del “cartel de Medellín” la muerte de Pablo Escobar, principal figura visible y promotor de la cruenta guerra del narcotráfico en el año 1993. De igual manera el descenso temporal de las cifras se atribuye a los resultados (aparentemente) positivos de la aplicación de programas estatales del orden nacional y municipal y que apuntaron a generar escenarios para la convivencia a la manera de acuerdos de paz, desmovilización de grupos de milicianos, dejación de armas y pactos de no agresión en los que se comprometió buena parte de los grupos y actores que se confrontaban en distintos sectores populares de la ciudad.

El año 1997 marcó nuevamente un hito por el crecimiento de las cifras de la violencia rompiendo con la tendencia de un periodo de descenso en el comportamiento de los homicidios y registrando otras prácticas delictivas de tipo paramilitar en el que opera una especie de transformación o incursión de antiguos “paras” en el negocio de narcotráfico y que desencadena nuevos enfrentamientos no ya entre grandes carteles sino entre pequeñas pero numerosas bandas que combinan la actividad ilícita de la droga con el accionar paramilitar. En este escenario la violencia repunta como

producto de la evidente pugna por el control territorial, el narcotráfico, la delincuencia común y las “vacunas” o practicas extorsivas a cambio de “seguridad y vigilancia” como forma de financiación de estos grupos delictivos que se van posicionando, conformando los llamados “combos, bandas y galladas o milicias” y delimitando zonas de control que se convierten en territorios vedados para los grupos en confrontación, para las personas residentes y aun para los representantes y fuerzas del Estado.

En los años subsiguientes se denotan acciones dispersas de los grupos mencionados y que terminan siendo absorbidos o dominados por la denominada banda “La Terraza”, una poderosa organización criminal que combina acciones de narcotráfico y sicariato. Así mismo, el traslado de la acción insurgente del campo a la ciudad va imponiendo el poderío ya sea de los grupos de autodefensas (paramilitares) o de los brazos armados de las guerrillas izquierdistas, de modo que estas fuerzas tienden a eliminar o a cooptar a las antiguas bandas y combos, incorporándolas a su accionar y orientándolas en acciones tanto o más crueles y violentas de las que ya la ciudad por varias décadas había soportado.

Para el periodo 2000 – 2003, la implantación de las guerrillas y las autodefensas en los barrios de la ciudad y la consiguiente disputa por la hegemonía armada entre ellos, condujo a que, en el 2002, la región de Medellín aportara el 81% de los homicidios, el 93% de las masacres y el 70% de los secuestros del departamento de Antioquia. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, correspondiente a ese año, aseguró que “el aumento de las acciones militares en las zonas urbanas y el fuerte incremento en el número de grupos milicianos, vinculados a las Farc-Ep, al Eln y a grupos paramilitares, produjeron un alza en los homicidios y las masacres en las ciudades” (Giraldo, 2003)

Iniciando la primera década del nuevo siglo se instauró entonces en la ciudad de Medellín un nuevo escenario de violencia marcado por la presencia de los dos actores que en aquellos años protagonizaban en todo el país los más sangrientos ataques contra la sociedad civil y los representantes del Estado; uno en la figura de los grupos de autodefensa que encarnan la extrema derecha (Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-) y el otro que actúa bajo las consignas de la extrema izquierda representada principalmente en los frentes urbanos de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en un fenómeno creciente de urbanización del conflicto político armado que no solo tuvo un gran escalamiento en aquellos años, sino que encontró también en la ciudad un campo fuertemente abonado para potenciar sus estrategias y su accionar político, militar y criminal. Un rasgo novedoso de este último escenario es pues el carácter político-militar del conflicto al ser protagonizado por unos grupos cuya lucha está orientada a la consecución del poder por la vía armada, pero desde la perspectiva parainstitucional y la perspectiva contrainstitucional que inspiran las acciones de las Autodefensas y de las FARC respectivamente. La ciudad de Medellín se convirtió así en el escenario macabro donde ambos actores consolidaron su estrategia de urbanización del conflicto y el terreno era ya propicio por la existencia de los relictos derivados de las pasadas guerras del narcotráfico por un lado, y por la precaria o nula efectividad de la presencia institucional y los pobres resultados de las políticas y medidas de los gobiernos nacional y municipal para responder adecuadamente e intervenir en la resolución del conflicto con sus múltiples y encarnizadas manifestaciones.

En especial las zonas periféricas de la ciudad fueron históricamente relegadas y hasta dejadas a su suerte sin que se evidencie de manera contundente el interés público por atender a estas poblaciones en su situación de marginalidad, extrema pobreza, desempleo, desarraigo y conflictividad social. En ese contexto, se hacen muy atractivas y convenientes para que sea en ellas donde se instalen los centros de operación de los grupos armados quienes despliegan allí su dominio militar, imponiéndose en cuadras y sectores, barrios y comunas enteras como poderes paralelos a los del Estado, con su propias formas de regulación y control social a los habitantes, modalidades de imposición o tributación económica, delimitación y control territorial, autoridad para intervenir en conflictos y determinación de normas de

conducta (formas de vestirse de las mujeres, toques de queda con límite de horarios para transitar por las calles, prohibición del ingreso o recorridos de automóviles de servicio público) que se consideraban de forzoso cumplimiento y que de ser desafiadas o incumplidas acarrearían riesgos sobre la seguridad, la integridad física, y la propia vida de las personas que habitaban dichos sectores.

En la ciudad de Medellín la ordenación física y la condición socio-económica de las comunas más vulnerables de la ciudad fue en gran parte determinada por dinámicas asociadas a los fenómenos de migración, la industrialización y urbanización de la ciudad, el desplazamiento y la movilización interna de la población, de modo que poco se implementaron allí las prácticas de planificación y ordenamiento urbano y tampoco las políticas públicas se esforzaron por integrar a sus pobladores a los procesos de socialización, institucionalización o normalización, y menos aún a las dinámicas productivas y sociales en la construcción de la ciudad.

Se trata de barrios que resultaron como producto histórico del crecimiento y el dinamismo industrial de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX y que gradualmente fue forzando la expansión urbana desde el centro poblado de origen hacia las zonas periféricas y el ascenso por las laderas tutelares. Allí, buena parte de la población se ubicó en asentamientos ilegales e informales que fueron creciendo como producto del fenómeno de migración rural-urbana motivado por el auge modernista e industrial en un principio, y que en las décadas finales obedeció ya al fenómeno de desplazamiento campesino motivado por la dinámica propia del conflicto armado en diferentes regiones del país y el departamento y que incluso forzó en la ciudad un fenómeno de desplazamientos intraurbanos; es decir, el desalojo de población de unos barrios y sectores a otros dentro de la misma ciudad. Independientemente de las razones que lo motivaran, ese desplazamiento y reubicación forzada de una población numerosa entrañaba sin duda factores de desestabilización, marginación, exclusión y fragmentación tanto de los núcleos familiares como de las relaciones de los individuos frente a los procesos sociales y su inserción en la ciudad.

Los pobladores de las comunas vulnerables, en su mayoría, son pertenecientes a los estratos socioeconómicos medio-bajo y bajo, con sectores poblacionales en gran parte de origen campesino que alcanzan a ubicarse incluso en estrato bajo-bajo y se agrupan ya no en barrios propiamente dichos, sino en pequeños sectores acondicionados precariamente para vivienda en condiciones de ilegalidad e informalidad pero sobre todo de gran riesgo físico por las características de los terrenos de ladera que llegan a habitar. Se presentan zonas en donde hay mayor incidencia de los asentamientos subnormales y presencia de poblaciones desplazadas provenientes de diversas regiones y municipios de Antioquia. Rasgos característicos de esta población son el origen campesino de la mayoría de las familias que los habitan, describiendo una dinámica en que aquellos que llegan primero y logran asentarse, sirven de acogida y brindan un espacio para otros grupos de familiares o vecinos provenientes también de sus pueblos de origen, de modo que pueden incluso reconstruir allí algunos lazos familiares y recrear las dinámicas de vecindad y estilos de vida que antes desarrollaban. Esta práctica implica que estas poblaciones conformen especies de islas sociales dentro de la ciudad, en espacios muy limitados y con población creciente, en condiciones de hacinamiento y desafiando casi siempre el riesgo que implica vivir en zonas no aptas y riesgosas, como una manera de adaptarse en la ciudad pero sin incluirse propiamente en ella.

En términos de la dinámica económica es característico que ante las escasas oportunidades para involucrarse en la economía y la “ciudad formal”, los pobladores de los barrios periféricos vulnerables constituyan sus propios circuitos económicos de tipo informal e incluso ilegal, y de algún modo exporten sus conflictos y formas de supervivencia a esa ciudad formal, donde extienden sus actividades económicas relacionadas con ventas ambulantes, reciclaje de basuras, servicios personales domésticos, construcción, entre otros; ocupaciones que se caracterizan por ofrecer muy bajas remuneraciones económicas, poca estabilidad laboral y que por lo general realizan de manera independiente o por cuenta propia, sin vínculos laborales o contractuales con un empleador,

incurriendo así en los riesgos propios de la falta de seguridad social y casi nulo acceso a los beneficios prestacionales y pensionales a que todo trabajador debe acceder. Como consecuencia de lo anterior se reproducen y deterioran cada vez más las condiciones y calidad de vida de estas poblaciones, constituyendo como viene antedicho, un campo largamente abonado para el surgimiento de conflictos al interior de los propios habitantes y familias y para la cooptación y el reclutamiento de personas para los propósitos de los grupos armados.

Los rasgos comunes que comparten estos pobladores señalan gran precariedad de su calidad de vida, escasamente sustentada en muy bajos e inestables ingresos, condiciones de subempleo o desempleo, informalidad, bajo nivel educativo, y la prevalencia de problemas sanitarios como desnutrición, epidemias, plagas, entre otros. Su hábitat no es menos precario, dada su incapacidad económica para proveerse una vivienda digna se recurre a construir albergues soportados en materiales de desecho y estructuras poco estables, espacios poco funcionales, carencia de uno o más servicios públicos básicos o en el mejor de los casos se cuenta con provisión ilegal de ellos. Las altas tasas demográficas generan inevitablemente el hacinamiento, dificulta el acceso a los servicios sociales, educación, salud, seguridad, saneamiento y de servicios públicos de transporte, aseo, alcantarillado, y en el entorno externo es visible el deterioro, la incomodidad y el riesgo al encontrarse en terrenos erosionados, inundables, o propensos a deslizamientos, calles antitécnicas y en mal estado, ausencia de zonas verdes, de aceras peatonales y toda oferta de espacio público para la socialización, el disfrute y la recreación.

El caso de los barrios vulnerables de Medellín representa la situación de cientos de familias pertenecientes a los estratos socioeconómicos más bajos de la población, casi siempre carentes de preparación académica o capacitación, como herramientas que les permita acceder a mejores oportunidades y niveles de ingreso para elevar su calidad de vida. Adicionalmente, estos pobladores llegan a ubicarse en las zonas periféricas y las laderas de la ciudad, en territorios que no han sido normalizados y provistos de los servicios públicos y de saneamiento básico precisamente, porque se encuentran por fuera del perímetro sanitario establecido, o porque las condiciones técnicas de los terrenos no las hacen aptas para ser habilitadas como área residencial. Una vez establecidas allí, estas familias recurren a proveerse por su cuenta de los servicios elementales como el agua potable y la energía mediante mecanismos y conexiones precarias y artesanales, en principio ilegales y que gradualmente acondicionan en la medida que van mejorando su forma de organización social y surgen líderes que los van orientando y recogen sus demandas ante la municipalidad. El gobierno local por su parte, ha debido generar estrategias de intervención que van desde prácticas de desalojo y reubicación hasta programas de asistencia y concertación para garantizar a estas familias los servicios fundamentales y el acceso a salud y educación, de manera que gradualmente o por épocas, se logra mejorar la presencia de la institucionalidad en la zona y se intentan por diversos medios dar atención a las necesidades más apremiantes de esta población. Pese a los esfuerzos estatales, la expansión misma de los asentamientos, el número creciente de pobladores y la conjugación de otros factores detonantes del conflicto social como la presencia de los actores armados, opacan el impacto de la acción pública y llegan incluso a cuestionarla, le disputan su presencia y pretenden deteriorar su gobernabilidad al autoerigirse como un nuevo “orden” que se impone por la fuerza de las armas, la violencia y la intimidación.

Frente al panorama descrito no es difícil señalar que han sido factores como la desocupación juvenil, la desarticulación familiar, la falta de educación, recreación y salud, la falta de oportunidades y de inserción en la economía urbana, especialmente para estos pobladores de los barrios populares y de los asentamientos de desplazados del campo, las que se convierten en las bases históricas del conflicto que ha marcado la historia de Medellín.

Ante la magnitud progresiva de esta serie de situaciones y pese a los esfuerzos institucionales para proveer presencia y programas asistenciales en esas zonas, el estado municipal careció de los

mecanismos suficientes y efectivos para frenarlas y lograr vínculos claros con la ciudadanía y poder cubrir satisfactoriamente sus demandas sociales.

En esa dirección, diferentes ejercicios y programas fueron implementados con esta población (como el PRIMED, Programa de Convivencia Ciudadana, las Mesas Barriales de Convivencia, los Pactos de no Agresión), y se potenciaron formas organizativas y expresiones ciudadanas como vías de resolución al conflicto y mejoramiento de la convivencia. En los escenarios de participación y acción cívica las organizaciones sociales y comunitarias hallaron la manera de sustituir los fines y acciones estatales por fines comunitarios y vecinales, y también allí el Estado local encontraba en las iniciativas ciudadanas una vía para recuperar y elevar sus propios niveles de legitimidad y gobernabilidad.

En muchos de estos sectores que han surgido de la ilegalidad como barrios de invasión, sus pobladores están expuestos a un ambiente de marginalidad y de exclusión que ha servido de plataforma para justificar la instauración de grupos ilegales con la consigna de luchar y velar por la defensa de los intereses y necesidades de las comunidades marginadas o excluidas. Esta situación propició una serie de desórdenes y tensiones en el proceso de apropiación, habitación y explotación del espacio como referente económico, social y cultural, al tiempo que creó en poblaciones con estas características un alto nivel de vulnerabilidad, dadas sus precarias condiciones geográficas, demográficas, sociales y de equipamiento urbano. La vulnerabilidad constituyó un factor de riesgo interno que se presentaba precisamente por el poco desarrollo alcanzado por parte de las comunidades, en términos socioeconómicos, políticos, psicosociales y físicos, profundizando la probabilidad de que algunos sectores poblacionales fueran absorbidos y manipulados por los conflictos existentes en la zona, que en su especificidad son de índole intrafamiliar, vecinal y armado. Se presentan problemas de tipo intrafamiliar que se viven especialmente en las familias de estratos bajos y que tienden a agravarse debido a problemáticas de infidelidad marital, inasistencia alimentaria, madresolterismo, llegadas tardías de los y las adolescentes a casa sin la anuencia de sus padres, abuso sexual y riñas familiares.

En el entorno barrial y vecinal la mayoría de las disputas terminaban en conflictos serios aun cuando las causas son a veces irrelevantes como peleas entre familiares o riñas entre niños y adolescentes, problemas de linderos, envidias, rencillas personales, o por problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. También el conflicto era de tipo armado debido a que los grupos armados al margen de la ley le ofrecían a los jóvenes desempleados oportunidades laborales que se sustentaban en la guerra misma, mediante prácticas delictivas que se nutrían de los recursos provenientes de la actividad del narcotráfico y el auge económico que se logró en esa época en la ciudad, lo cual “parecía” razón válida para dejarse seducir por estos y otros ofrecimientos. Muchos jóvenes y adolescentes debutaron así como asesinos a sueldo, mercenarios en una guerra que no creían propia pero de la cual bien podrían lucrarse y hasta ofrecer alguna oportunidad a sus familias. En esa dinámica muy poca relevancia tendrían las motivaciones ideológicas o los intereses personales o económicos de quien obraba como “patrón”, lo que creaba mayor distancia entre las supuestas defensas ideológicas o políticas de algunos actores armados y los encargados de ejecutar sus órdenes; lo importante no era compartir las razones de la guerra sino operar bajo el mando de quienes demostraban mayor poderío y someterse a la lógica de ese actor dominante.

La complejidad del conflicto urbano que se instauró en la ciudad comportaba entonces aspectos estructurales largamente enquistados en el sistema socio-económico y cultural, y también factores coyunturales que se sumaron como detonantes en un conflicto que involucraba cada vez un mayor número de actores ya fueran de manera directa o indirecta. Se hablaría entonces de la combinación multicausal del conflicto y que este cada vez fue alcanzando intensidades más cruentas y desestabilizadoras.

Para determinar las principales causas del conflicto urbano en Medellín, habría entonces que remitirse al ámbito nacional, donde tienen lugar los hechos estructurales que por cuenta del desacierto en muchas de las decisiones y el direccionamiento político fueron enquistando los elementos de la

crisis social y económica que ha vivido Colombia y acumulando a lo largo de la historia los problemas y profundos desequilibrios sociales, factores de desestabilización e incertidumbre social, que sin duda atentan contra la adecuada convivencia social. La historia del conflicto armado en el la nación colombiana esgrime en las razones expuestas la justificación de su existencia prolongada, amparada también en una ideologización de tipo revolucionario, cuyas acciones bélicas se intensificaron y extendieron a los ámbitos urbanos alcanzando a poblaciones que antes creían estar protegidas y veían el conflicto como algo indeseable pero lejano. Al llegar los actores armados a la ciudad convirtieron algunas de sus comunas en uno de los escenarios de guerras más notorios, no sólo por los precedentes que las hacían vulnerables sino por la ubicación estratégica de ciertos sectores que conforman corredores urbano-rurales que unen a la capital medellinense con otras subregiones del Departamento de Antioquia.

La conexión territorial de las comunas de la ciudad con otras subregiones, propicia además un flujo poblacional que no se detuvo por el conflicto y que continuó trasladando pobladores de las áreas rurales que fueron agolpándose en sus laderas. Miles de personas provenientes del oriente antioqueño, pero también de la zona de Urabá y Chocó o de los municipios del suroeste y otras regiones, seguían huyendo de sus pueblos de origen azotados por los enfrentamientos armados y se convertían en nuevos desplazados expuestos a padecer los problemas que esto implica, bien sea porque se convierten en víctimas del conflicto urbano o porque se insertan como protagonistas directos de la problemática que vive la ciudad. En su nueva condición, estas familias reproducen la historia de sus predecesores y en los barrios de invasión o sectores marginales de la periferia urbana se someten a sufrir el hacinamiento, condiciones insalubres, desempleo, y en general el desarraigo social que los convierte en objetivo de actores ilegales o nuevas víctimas de la incertidumbre social, de una manera crítica enfrentan todos aquellos factores que potencian la condición innata del hombre a solucionar sus problemas en la base del conflicto y en sus connotaciones violentas.

Como se ha visto, no son pocos los problemas que los pobladores de las comunas vulnerables de Medellín deben sortear y, de modo cotidiano, se enfrentan a conflictos intrafamiliares o vecinales y a una fuerte estrategia de supervivencia familiar; no obstante, la crudeza de esa realidad terminaba siendo opacada y los conflictos propios eran relegados y subsumidos por el conflicto político armado, el cual generó una especie de efecto de invisibilización de los demás fenómenos e incluso los puso a girar en torno a sus propias lógicas y dinámicas. La existencia de numerosas bandas criminales en los diferentes barrios, unas al servicio del narcotráfico y otras como brazos urbanos de los grupos armados ilegales, sometía a sus habitantes en una especie de régimen de terror en donde los actores del conflicto ejercían su poder, control y financiamiento, a través de diversas formas delictivas: Una práctica común fueron las “vacunas”, que se definen como un cobro extorsivo a los habitantes de los sectores donde actúan los grupos y cuyas víctimas eran principalmente los empresarios, propietarios o empleados del comercio y actividades de transporte público; también el atraco callejero y raponeo como forma primaria de enriquecimiento o sobrevivencia azotó a residentes y visitantes de estos barrios; así mismo se recurrió al robo o desmantelamiento de vehículos a los particulares o el asalto a vehículos de empresas privadas que distribuyen sus productos en las tiendas de barrio; el sicariato, definido como el asesinato a sueldo; el mercenarismo, en donde expertos en terrorismo y estrategias militares preparan a los actores armados en las artes de la guerra; el expendio y consumo de droga que posibilita la demarcación de territorios con el fin de recibir ingresos por su distribución; los robos de apartamentos, residencias y bienes de propiedad privada; la piratería terrestre, con acciones de asalto en vías de acceso a la ciudad; los secuestros, en donde se raptan a personas con fines políticos o extorsivos y la desaparición, como forma violenta de eliminación del enemigo. Los residentes de estos barrios conocieron muy de cerca el amplio repertorio delictivo y criminal de las bandas, bien porque sus calles se convirtieron en escenarios adaptados para delinquir o porque muchos de sus pobladores, especialmente los más jóvenes fueron reclutados a veces por la fuerza y otras por persuasión para entrar a formar parte de los grupos y

a encontrar en ellos una forma de vida, pero más una forma de muerte, profundizando aún más la crisis social donde ellos y sus familias fueron las primeras víctimas. El siguiente testimonio refleja fielmente esta situación.

*“Yo comencé hace 18 años, cuando apenas tenía 15. Robaba motos, para vestirme bien y tener plata para salir con las peladas. Uno va conociendo gente y se asocia. Es una competencia por demostrar que uno puede más que el otro. Cada vez se va volviendo uno más profesional. En la época de Pablo, trabajamos como sicarios, robamos bancos y nos pagaban por cada policía. Después de eso, seguimos con el fleteo porque eso nos deja buena plata y también la venta de droga. Uno sabe aquí como se mueve todo, donde consigue armas o lo que necesite.” aseguró Alex (El Espectador: Bogotá, 8 de abril 2009)*

Muchas de estas conductas delictivas surgieron pues y se mantuvieron por años al amparo del narcotráfico y quienes se involucran empiezan a cumplir misiones relacionadas con “cuidar el negocio”, “ajustar cuentas”, “cobrar venganzas” y así han sido muchos los grupos de jóvenes que prácticamente crecieron conociendo esta como su única forma de subsistencia que con el paso de los años ha cambiado simplemente de “jefes” o de patrocinadores, pero que en esencia reproduce uno de los flagelos sociales más lesivos y largamente combatidos por las autoridades, con un gran componente de impunidad y una dinámica de permanencia que pareciera nunca desaparecer, así como no han desaparecido sus causas y detonantes.

## **BIBLIOGRAFIA**

1. Aguilar, S. Movimientos sociales y cambio social. ¿Una lógica o varias lógicas de acción colectiva? En: Revista Internacional de Sociología (RIS). Sep-Dic. 2001 N° 30. Pág. 29-62.
2. Alcaldía de Medellín. 2000. Experiencias en la resolución pacífica de conflictos en Medellín. Medellín: Programa de Convivencia ciudadana. 145p.
3. Brugué, Q. Et-al. Sep-Dic. 2002. De la Pobreza a la Exclusión Social. En: Revista Internacional de Sociología (RIS). N° 33. Pág. 7-45.
4. Centro de Investigaciones Urbanas-CIU. Boletines Ciu-dad. N°s: 2-3-4-6 y 7. Medellín: CORPADES. 2002 a 2004.
5. Daza, A. Et-al. 2001. Experiencias de intervención en el conflicto urbano. Tomos I y II. Medellín: Alcaldía de Medellín. Programa de Convivencia Ciudadana..
6. Giraldo, J. 2003. Conflicto armado urbano y violencia homicida. El caso de Medellín. Centro de Análisis Político Universidad Eafit - Colombia
7. Granda Marín, A y Ramírez Adarve, I. 2002. Contexto General de la violencia en Medellín. Medellín: S.E., S.F
8. Informe Nacional de Desarrollo Humano-Colombia. 2003. El conflicto, callejón con salida. Entender para cambiar las raíces locales del conflicto. Bogotá: PNUD.
9. López-Alves, F. 2003. La formación del Estado y la democracia en América Latina, 1810-1900. Bogotá: Norma. 328 p.
10. Martínez López. 2003. Los movimientos sociales urbanos. En: Revista Internacional de Sociología (RIS). N° 34. Ene-Abr. 2003. Pág. 81-106.
11. Moreno B., R. (Compilador). 2003. Conflicto urbano y derechos humanos en Medellín. Balance desde diferentes sectores sociales. Medellín: IPC. 208p.
12. Nieto, J y Robledo, L. 2001 Guerra y paz en Colombia: 1998-2001. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana.



13. Nieto, J. (Compilador). 2004 Colombia en la coyuntura de 2003. Medellín: Departamento de Sociología. Universidad de Antioquia.. 187p.
14. Pizarro Leóngómez, E. 2002 Colombia: Guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista, ¿o guerra ambigua? En: Análisis Político. Bogotá: IEPRI-Universidad Nacional. N° 46. mayo-agosto..
15. \_\_\_\_\_. 2004. Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 364p.
16. Posada Carbó, L. 2002 ¿Guerra civil?. El lenguaje del conflicto en Colombia. En: Libros de Cambio. Mayo 28 de 2002.
17. Quijano Moreno, L. 2002 “Conflicto urbano: ¿violencia o guerra urbana?” En: Observatorio del Conflicto Urbano. Medellín: CORPADES. Edición Especial N° 4 y 5. Julio-Octubre . Pág. 5-27.
18. Ramírez Tobón, W. 2002 ¿Guerra civil en Colombia? . En: Análisis Político. Bogotá. IEPRI-Universidad Nacional. N° 46. mayo-agosto..
19. Uribe de H, M. 2001. Nación, Ciudadano y Soberano. Medellín: Corporación Región. 303 p.
20. \_\_\_\_\_. 1999. “Las soberanías en disputa: ¿conflicto de derechos o de identidades”. En: Revista Estudios Políticos #15